

**EL HONORABLE QUINCUAGESIMO OCTAVO CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA**

C O N S I D E R A N D O

Que en Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía tuvo a bien aprobar el Dictamen con Minuta de Decreto, emitido por la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, por virtud de la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Defensa Social, ambos para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Que la libertad de expresión es un derecho fundamental garantizado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e instrumentalizado a partir de la libertad de prensa, amparada por el artículo 7 de la Ley Fundamental del país, así como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado Mexicano, principalmente en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el diverso 13.

Que la libertad de expresión, comprende otros derechos humanos para su ejercicio:

- Derecho a manifestar por medios orales o escritos, las ideas u opiniones de cualquier índole, que comportan el derecho a hablar y a escribir.
- Derecho a difundir las expresiones, a través de la difusión, por los medios, legales, que se elijan para ello.
- Derecho a la expresión artística o simbólica, y a su difusión.
- Derecho a buscar recibir y acceder a expresiones, ideas y opiniones de toda índole.
- Derecho a tener acceso a la información sobre sí mismo, ubicada en registros públicos o privados.
- Derecho a poseer información, a transportarla y distribuirla.

Que este derecho humano comporta una doble dimensión en su ejercicio y goce, por un lado la libertad de expresión se refiere al derecho individual a manifestar todas las ideas u opiniones, respecto de cualquier tema, así como el derecho a difundirlas por los medios que se decidan y convengan para ello, como mecanismo de materialización y expansión de la cobertura de esas manifestaciones; por otro lado, la dimensión social de la libertad de expresión, se refiere al derecho a recibir dicha información, sin restricciones y sin condiciones de ningún tipo, a fin de generar espacios de debate y discernimiento, principalmente sobre asuntos de interés general y de toma de decisiones públicas, que sea integral y no limitativo, de tal manera que las decisiones no sólo sean discutidas en los foros donde la participación se restringe, por su naturaleza, a los órganos revestidos de autoridad, independientemente del proceso que se haya

determinado para ello, sino que la deliberación continúe dentro de la sociedad, haciendo ejercicio de la libertad de expresión, como instrumento esencial para la participación ciudadana proactiva.

Que el ejercicio de este derecho, sin importar la dimensión que se considere, se encuentra delimitado a los límites naturales de todo derecho humano, que representa esencialmente la probable violación a la esfera personalísima de los derechos de terceros y a la probable necesidad derivada de la perturbación del orden público; sin embargo, no pueden existir limitaciones a este derecho, sino es respecto de responsabilidades ulteriores a la manifestación de las ideas, es decir, queda prohibida toda forma de censura previa, así como de la falsa justificación de la declaratoria de necesidad frente a una situación de hecho, sino esta no se determina bajo parámetros proporcionales, en el ejercicio de ponderación entre el riesgo inminente y las medidas que se han de asumir para enfrentarlo.

El Estado está obligado a proteger la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, como condición para el ejercicio de otros derechos, por lo tanto, debe de garantizar, a los medios de comunicación, entre otras cosas:

1. Todos los medios posibles, para lograr absoluta libertad e independencia en su actividad, a fin de que se ejerza la función crítica, principalmente respecto de las decisiones públicas;
2. Brindar todas las condiciones necesarias, a fin de evitar que la autocensura e inhibición de dicha actividad por miedo a represalias; esto implica el deber de

investigación en casos de delitos contra quienes ejerzan la actividad de comunicación social;

3. La prohibición, en la mayor medida, y principalmente en eventos públicos, de discursos oficiales, que pretendan criminalizar la labor de los medios de comunicación.

Que por otro lado, el olvido y las tendencias contradictorias de algunas entidades federativas, que irresponsablemente han incrementado la penalidad, y con ello el sentimiento de criminalización de la libertad de expresión, ha agravado las condiciones en las que los medios de comunicación deben ejercer su trabajo, ya que no sólo deben afrontar el desafiante nivel de violencia provocado por conflictos armados derivados de probables enfrentamientos del crimen organizado, sino que algunos mecanismos legales, han dado origen a la autocensura, y provoquen inhibición del libre ejercicio de la libertad de expresión, por miedo a represalias, que no constituyen violaciones directas, como en el caso de amenazas, hostigamiento o atentados, sino de violaciones indirectas como es la penalización de conductas no delictivas, como lo es la manifestación de las ideas.

La tipificación de los delitos de calumnia y difamación, como conductas penalmente sancionables, resulta desmedida y desproporcional, por ende resulta inhibitorio del ejercicio plenamente democrático de la libertad de expresión; por lo que a efecto de que todas las personas y los medios de comunicación tengan garantizados plenamente sus derechos a la libre expresión, a informar y a ser informados, robusteciendo con ello la democracia, y desterrar las prácticas de los regimenes autoritarios, se propone derogar los mencionados delitos del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de armonizar nuestra legislación, a los estándares internacionales en temas de derechos humanos, y a lo

establecido al respecto en la legislación federal en materia penal; así como dar cumplimiento a la Recomendación General 17 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Que la sanción penal, en una democracia, constituye el último recurso aplicable, en caso de que se hayan agotado todas las opciones restantes, por lo que resulta además necesario reformar el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de que no exista sanción privativa de la libertad a quienes incurran en estas prácticas, sino una reparación económica proporcional al hecho, y que en razón del principio de legalidad, atienda a lo que establezca la Ley aplicable. En esta tesitura y a efecto de que el monto de la indemnización del daño moral no sea excesiva en relación con el hecho cometido, se prevé que el monto de la misma no exceda de la cantidad equivalente a tres mil días de salario mínimo vigente en el Estado, cantidad que fijará un Juez siempre atendiendo los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

También con el fin de que queden resarcidos plenamente los derechos de la personalidad, se prevé que toda persona física o jurídica que publique cualquier tipo de escrito, tendrá la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, columnas, párrafos, reportajes o entrevistas y similares, siempre y cuando no se usen expresiones contrarias a la dignidad de quien las publicó o a terceras personas y que no se cometa algún hecho prohibido por Ley y con el ánimo de reforzar esta disposición se incorpora a la Ley una sanción para quien se niegue a publicar la rectificación o respuesta en los términos referidos, consistente en una multa con parámetros mínimo y máximo por el importe de cien a mil quinientos días de salario mínimo vigente.

Que sin dejar de lado, que las reformas legislativas que se propongan y lleven a cabo, una vez agotados los pasos del proceso legislativo establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, deben ser propuestas integrales, y atentos al compromiso asumido de respeto irrestricto a los derechos humanos, se propone reformar el Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de reforzar la sanción del delito de falsedad de declaración, así como las garantías de reparación del daño y con el objeto de no dejar en total desprotección a quienes en razón de la posición que ocupan, en las relaciones de poder, se ostentan como los más débiles, y proteger su derecho al honor y propia imagen, cuando se declare en falsedad o se impute la comisión de hechos delictivos a una persona, ante autoridad ministerial o judicial, para dar inicio o continuar un proceso penal.

Que el presente Decreto fue motivo de intenso análisis, debate y discusión por parte de los legisladores que integran esta Soberanía, por lo que en la misma Sesión Pública Ordinaria del Pleno del Honorable Congreso del Estado, Diputados integrantes de los diversos Grupos Parlamentarios de esta Quincuagésimo Octava Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 31 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 93 fracción VII, 96 fracción IV y 97 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, sometieron a consideración de la Asamblea, las modificaciones al Dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, respecto de las reformas y adiciones al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, por tanto, una vez votado y aprobado, fue incorporado a la presente Minuta de Decreto.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracción I, 63, 64, y 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 43 fracción I, 69, 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20, 21, 22, 23 y 24 fracción I del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1958 Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO DEL 1958, EL 1958 BIS Y EL 1958 TER, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; ASI COMO SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 254 y 256, Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 255, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, Y 372 DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se **REFORMA** el párrafo segundo del artículo 1958 y se **ADICIONAN** los párrafos tercero, cuarto y quinto del 1958, el 1958 Bis y el 1958 Ter, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:

Artículo 1958.- ...

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que

hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, determinada por el juez, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual.

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Dicho monto no excederá de tres mil días de salario mínimo vigente.

Artículo 1958 Bis.- Toda persona física o jurídica que publique cualquier tipo de escrito, tendrá la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, columnas, párrafos, reportajes o entrevistas y similares, siempre que la respuesta se dé dentro de los ocho días naturales siguientes a la publicación; que su extensión no sea mayor al triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de particulares; que no se usen expresiones contrarias a la dignidad de quien las publicó o a terceras personas y que no se cometa algún hecho prohibido por ley.

La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades con que se hizo la publicación del artículo, editorial, columna, párrafo, reportaje o entrevista y similares a que la rectificación o respuesta se refiere.

La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en que se reciba, si se trata de publicación diaria o en el número inmediato, si se trata de otras publicaciones periódicas. Si la respuesta o rectificación se recibe cuando ya no pueda publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente.

A la persona física o jurídica que se niegue a publicar la rectificación o respuesta en los términos referidos, el Juez le impondrá una multa por el importe de cien a mil quinientos días de salario mínimo vigente.

Artículo 1958 Ter.- Toda sentencia que se pronuncie con motivo de daño moral, se publicará a costa del responsable si así lo exigiere el agraviado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se **REFORMAN** el primer párrafo, las fracciones II, III, IV, V, VI, y VII del artículo 254 y el 256; y se **DEROGAN** los artículos 255, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 y 372 todos del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:

Artículo 254.- Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa de diez a mil quinientos días de salario:

I.-...

II.- Al que declare ante una autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta, ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente su existencia o la de alguna circunstancia que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad;

III.- Al que con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento de defensa social, ante el Ministerio Público o ante la autoridad Judicial, declare falsamente en calidad de testigo o como denunciante o querellante.

La pena de prisión se aumentará en una mitad para el testigo falso, denunciante o querellante que fuere examinado en un procedimiento penal, cuando su testimonio, denuncia o querrela se rinda para producir convicción sobre la responsabilidad del indiciado o procesado, por un delito no considerado como grave. Si se trata de delito considerado grave, la pena de prisión aumentará en dos tantos;

IV.- Al que examinado como perito por la autoridad judicial o administrativa dolosamente falte a la verdad en su dictamen;

V.- Al que aporte testigos falsos conociendo esta circunstancia, o logre que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad o la oculte al ser examinado por la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones;

VI.- Al que con arreglo a derecho, con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado por la autoridad y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito determinado documento, afirmando un hecho falso, o negando o alterando uno verdadero o sus circunstancias substanciales, ya sea que lo haga en nombre propio o en nombre de otro.

Lo prevenido en esta fracción no comprende los casos en que la parte sea examinada sobre la cantidad en que estime una cosa, o cuando tenga el carácter de indiciado o procesado en una averiguación o proceso penal; y

VII.- Al que siendo autoridad, rinda a otra informes en los que afirme una falsedad o niegue u oculte la verdad, en todo o en parte.

Además de las penas a que se refieren las fracciones anteriores, se suspenderá hasta por tres años en el ejercicio de su profesión, ciencia, arte u oficio al perito, intérprete o traductor que se conduzca falsamente u oculte la verdad al desempeñar sus funciones.

Artículo 255.- Se deroga.

Artículo 256.- El testigo, el perito el intérprete o traductor que se retracten espontáneamente de sus falsas declaraciones rendidas en juicio, antes de que se pronuncie sentencia en la instancia en que las dieron, sólo pagarán multa de uno a diez días de salario; pero si faltaren a la verdad al retractarse de sus declaraciones, se les aplicará la sanción que corresponda conforme a esta sección, considerándolos como reincidentes.

Artículo 357.- Se deroga.

Artículo 358.- Se deroga.

Artículo 360.- Se deroga.

Artículo 361.- Se deroga.

Artículo 362.- Se deroga.

Artículo 363.- Se deroga.

Artículo 364.- Se deroga.

Artículo 365.- Se deroga.

Artículo 366.- Se deroga.

Artículo 367.- Se deroga.

Artículo 368.- Se deroga.

Artículo 369.- Se deroga.

Artículo 370.- Se deroga.

Artículo 371.- Se deroga.

Artículo 372.- Se deroga.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación de este Decreto, expedirá en su caso, las adecuaciones a la legislación correspondiente.

EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil once.

**RAFAEL VON RAESFELD PORRAS
DIPUTADO PRESIDENTE**

**JESÚS MORALES FLORES
DIPUTADO VICEPRESIDENTE**

**ENRIQUE NACER HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO**

**ERIC COTOÑETO CARMONA
DIPUTADO SECRETARIO**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL, AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.